

Brasil: ¿Podrá recuperarse de su imagen de paria medioambiental?

de Gabriela Litre

Cada año, el Instituto Rio Branco, la respetada y exigente escuela de formación de los diplomáticos brasileños, organiza una ceremonia de graduación de sus alumnos. Entre los invitados, se encuentran tradicionalmente el presidente de la República, periodistas, parlamentarios y diversas autoridades.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia es el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, pues en él, además de las felicitaciones de rigor a los nuevos diplomados, son mencionadas las prioridades de la política exterior brasileña. El 22 de octubre de 2020, el discurso en el Instituto Rio Branco estuvo a cargo del entonces ministro Ernesto Araújo. El representante de Itamaraty (como es llamada la cancillería brasileña) concluyó su ponencia de casi 40 minutos con una frase que aún eriza la piel de muchos diplomáticos de carrera: *"Si hablar de libertad en el mundo nos convierte en un paria internacional, entonces seamos ese paria"*. Logró convertir a Brasil en un paria internacional, y lo hizo en tiempo récord, de la mano del presidente Jair Bolsonaro.

La política exterior que está llegando a su fin (el sucesor de Bolsonaro, Lula da Silva, debe asumir la Presidencia el 1 de enero de 2023 tras una intensa disputa electoral) usó un coctel casi infalible para destruir el trabajo que el ahora reelecto Lula había construido entre 2003 y 2010, especialmente en materia de protección forestal (Fonseca, Lindoso & Bursztyn, 2022).

La receta del gobierno saliente incluyó dosis iguales de intolerancia - todo pensamiento divergente, nacional o internacional, fue calificado de "comunista", "globalista" o directamente "corrupto"-, la defensa de agendas conservadoras en los foros multilaterales, especialmente los ambientales, el abandono del diálogo diplomático con mucho países del Sur Global, antagonismo declarado contra el gobierno chino, y, *last but not least*, el alineamiento incontestable con los intereses de Estados Unidos, al menos durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump.

Bolsonaro desestructuró las normas legales de protección ambiental y de comunidades tradicionales (especialmente de etnias minoritarias que viven de su convivencia armónica con la selva) impulsando el desarrollo económico de la floresta tropical mas grande y biodiversa del mundo, la Amazonia. Lo hizo tanto en las palabras como en los hechos: debilitó o directamente eliminó los organismos ambientales (con frecuencia excluyendo a los representantes de la sociedad civil, como ONGs e indios), y designó administradores provenientes de la agroindustria o directamente del sector militar, como lo demuestran varios de los «cargos de confianza» del ex ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en la página web de esa cartera.

La mayor parte del sector de agronegocios, que practica el cultivo de soja y de ganadería en gran escala y con alto uso de pesticidas como el glifosato (favoreciendo la destrucción de vegetación autóctona no solamente en la Amazonia si no también en el biodiverso bioma Cerrado), se opone a la creación de territorios indígenas y de otras zonas protegidas. Gran parte del sector del agronegocio, fuertemente representado en el Congreso, también impulsa la legalización de la toma de tierras para su uso industrial. El impacto es fácilmente medible: la deforestación de la selva amazónica alcanzó el nivel más alto en 15 años entre agosto de 2020 y julio de 2021, según cifras oficiales. Según el sistema de monitoreo del uso de la tierra Prodes, implementado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la deforestación en la Amazonia durante el gobierno de Bolsonaro alcanzó los 40.000 km². Para dar una idea, es como si una superficie casi equivalente al tamaño de Suiza hubiese sido devastada en menos de cuatro años.

El Observatorio del Clima, una coalición de monitoreo de la deforestación y sus efectos climáticos, que reúne a más de 70 organizaciones ecologistas, informó por su parte que Jair Bolsonaro está concluyendo su gobierno con un aumento del 60% de la deforestación en la Amazonia en comparación con los cuatro años anteriores – es decir, durante los gobiernos de Dilma Rousseff (2015-2016) y de Michel Temer (2016-2018). Se trata, según la coalición, del mayor aumento porcentual de deforestación en un mandato presidencial desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1988.

Otros “resultados” del coctel anti ambiental de la administración saliente incluyen fuertes recortes de financiación ambiental, la desmovilización de funcionarios de carrera y la injerencia del gobierno federal en los órganos de control del medio ambiente. En efecto, la caída del presupuesto para políticas del sector medioambiental fue del 71% entre 2014 - cuando las transferencias alcanzaron el nivel más alto de la historia (13.300 millones de reales), en el gobierno del ahora re-electo Lula da Silva- y 2021, año que sólo contó con 3.700 millones de reales.

En cuanto al desmantelamiento de las agencias medioambientales en Brasil, un informe reciente, titulado *"La financiación de la gestión medioambiental en Brasil: una evaluación desde el presupuesto público federal"* y publicado de manera conjunta por el Instituto Socioambiental (ISA) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), señala que las reducciones financieras han golpeado especialmente a los organismos clave para combatir la deforestación en la Amazonia (Rizzini Freitas, Abreu Carvalho, & Oviedo, 2022).

Entre los órganos de control de la deforestación más afectados por los recortes presupuestarios se encuentran el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la agencia federal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente responsable de la supervisión, la concesión de licencias y otras funciones en el área medioambiental. También ha sido afectado el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), una autarquía vinculada al Ministerio de Medio Ambiente responsable de las acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (que también han sufrido

un importante aumento de la deforestación). Incluso el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), una agencia federal responsable de vigilar y difundir datos satelitales sobre la deforestación y los incendios forestales para ayudar a controlar los delitos medioambientales ha sido puesto en jaque.

El presupuesto del Ibama se ha ido reduciendo sistemáticamente año tras año, al igual que su ejecución. En el año 2021, según el estudio, sólo se gastó el 57% de lo que se había ejecutado en 2008. Ya en el caso del INPE, uno de los episodios más emblemáticos de la injerencia del gobierno federal en ese organismo ocurrió poco después de la elección de Bolsonaro, en 2019, cuando el entonces director de ese instituto de investigación, Ricardo Galvão, fue despedido por divulgar los datos del dramático aumento de la deforestación en la Amazonia ese año.

Bolsonaro criticó la publicación de los datos científicos objetivos y habituales (que no lo favorecían) y acusó al investigador Galvão de estar al servicio de ONG ambientales. Casi cuatro años más tarde, en octubre de este año, Galvão reveló los entretelones de su despido. Según el científico, el gobierno primero investigó en secreto su vida y su entorno, con la intención de encontrar algo que justificara su caída. *"No encontraron nada y se vieron obligados a despedirme, pasando por la vergüenza de ser un gobierno que agrade a la ciencia"*, escribió.

Otro testimonio que muestra la persecución directa o indirecta sufrida por las instituciones ambientales fue el de Denis Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Servidores del Medio Ambiente (Ascema) y empleado del instituto ambiental ICMBio. Rivas relató que las agencias medioambientales contrataron como empleados a efectivos de la policía militar, sin experiencia en gestión medioambiental, para intimidar a los empleados de carrera de esos órganos ambientales.

Es claro que estos y otros incidentes cambiaron profundamente la percepción mundial sobre Brasil y sobre su gestión del medio ambiente, tanto en el nivel nacional como el internacional. Durante años considerado un líder en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, el país es hoy visto como un paria ambiental, o todavía peor, como una amenaza para los esfuerzos mundiales de conservación de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Siempre se supo que Bolsonaro, un ex capitán del Ejército, desprecia las agendas ambientales. En sus 28 años como diputado federal y durante la campaña presidencial de 2018, el presidente saliente fue muy vehemente al afirmar que las cuestiones ambientales e indígenas constituyen, en su opinión, un impedimento para el desarrollo del país (es decir, para la industrialización de las áreas naturales protegidas y la expulsión de las comunidades tradicionales que viven allí desde hace milenios).

Hay un capítulo en su biografía que se ha convertido en emblemático, y que los propios bolsonaristas exhiben como una anécdota “divertida”. En 2012, cuando aún era diputado federal, Bolsonaro recibió una multa de diez mil reales (equivalentes al cambio actual a unos dos mil dólares) por pescar de manera ilegal en la costa sur de Río de Janeiro. Tan pronto como

Bolsonaro llegó a la presidencia, el funcionario que aplicó la multa en cumplimiento de sus funciones fue despedido de su trabajo. Un anticipo simple, pero enormemente ilustrativo, de lo que vendría.

El primer gesto práctico sobre la nueva directiva medioambiental se produjo poco después de la elección de Bolsonaro, en octubre de 2018. Bolsonaro pidió al entonces presidente Michel Temer que cancelara la celebración de la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP 25, en Brasil. La petición fue rápidamente concedida y la sede del evento se trasladó a Madrid, España.

Así y todo, y a pesar de sus denodados esfuerzos, Bolsonaro no pudo cumplir con algunas de sus más audaces promesas de campaña, como la de retirar a Brasil del Acuerdo de París - un compromiso global sobre el cambio climático que establece objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero - y la de fusionar los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura (otorgando, obviamente, el control de la agenda de medio ambiente al sector del agronegocio).

Pero sus esfuerzos antiambientales y en favor de la deforestación han dado, paradójicamente, abundantes frutos: Bolsonaro consiguió debilitar los organismos de control medioambiental, dificultó la imposición de multas a los destructores de la selva, redujo la participación de la sociedad en los consejos medioambientales, y atacó públicamente la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en proyectos de preservación y desarrollo sostenible. Bolsonaro llegó a sugerir que muchas ONG eran responsables de los incendios forestales intencionales (una forma de “preparar” el suelo para el cultivo de soja o de pasturas para el ganado), lo que aumentó la tensión con los socios internacionales que financian las iniciativas de estas ONG, así como los proyectos del gobierno.

En 2019, el gobierno de Bolsonaro decidió extinguir unilateralmente dos comités que se encargaban de gestionar el pulposo Fondo Amazonia, que recauda fondos para proyectos de protección de la selva y la biodiversidad. El entonces ministro de Medio Ambiente Salles, afirmó, sin pruebas, que habría irregularidades en la gestión de los recursos donados por los socios internacionales. A Noruega, el mayor donante del Fondo Amazónico, esta acusación no le hizo ninguna gracia y rápidamente canceló las transferencias, que entre 2008 y 2018 habían llegado a los 1.200 millones de dólares. Alemania, el segundo mayor donante, también suspendió las transferencias. Recientemente, a principios de noviembre, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que quien en realidad fue negligente en la gestión del Fondo Amazonia fue el gobierno federal, y fijó un plazo de 60 días para la reactivación del fondo.

En los casi tres años transcurridos entre la cancelación del Fondo Amazónico y la tardía decisión del Tribunal Supremo de poner las cartas sobre la mesa (una vez pasadas las elecciones presidenciales), el aislamiento internacional de Brasil ha crecido exponencialmente. El gobierno de la entonces canciller Ángela Merkel expresó su preocupación por las crecientes tasas de deforestación y el deterioro de los derechos territoriales indígenas. También en 2019, los incendios en la Amazonia enfrentaron a Brasil y a Francia. En términos inusuales en la

diplomacia, el gobierno francés dijo en un comunicado que el presidente Bolsonaro decidió no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en el tema de la biodiversidad.

Las advertencias de los parlamentarios de la oposición, de la universidad y de los sectores económicos de que las posiciones radicales en la gestión medioambiental y la diplomacia podrían dejar al país en una situación de aislamiento fueron desoídas por el gobierno, y reforzaron el sesgo ideológico de la administración. Es justo recordar que, cuando el ex ministro de Asuntos Exteriores Araújo dijo, en su ya inolvidable discurso en el Instituto Rio Branco, que "tal vez sea mejor ser ese paria que queda a la intemperie, en el exterior, que ser un invitado al banquete del cinismo interesado de los globalistas", sus afirmaciones no habían nacido de la nada. Detrás de sus reflexiones se encontraba el principal ideólogo del gobierno de Bolsonaro, el autoproclamado "filósofo" Olavo de Carvalho. De Carvalho era conocido como el "Steve Bannon" de Bolsonaro (en alusión al ex consejero de extrema derecha de Donald Trump), y falleció en enero de 2022 en los Estados Unidos, donde residía habitualmente.

Para el politólogo estadounidense Joseph Nye, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, el "globalismo" que atacaba De Carvalho es simplemente un eslogan político que ha sido utilizado por otros líderes nacionalistas-populistas para condenar a las élites que participan en los asuntos globales, como el comercio y las instituciones internacionales². Influidos por De Carvalho, los ministros Araújo y Salles, así como Bolsonaro, han hábilmente convertido la lucha contra el calentamiento global (basada en datos científicos internacionales) en narrativas conspirativas sobre un supuesto enfrentamiento "ideológico" entre progresistas ("comunistas") y antiglobalistas (ellos).

Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), explica que la administración Bolsonaro se ha apropiado del discurso de la extrema derecha en todo el mundo, consiguiendo transformar el debate sobre la preservación del medio ambiente en una guerra cultural. ¹ *"La derecha populista ha eliminado la dimensión científica del debate y ha acusado a las llamadas 'élites globalistas' de crear una amenaza imaginaria para socavar el Estado nacional, favoreciendo a las plataformas internacionales, a las que acusa de tener poca legitimidad democrática"*, afirma.

Correspondió a Olavo de Carvalho aportar el barniz ideológico para que el discurso bolsonarista no se redujera a una simple rabia contra el aparato estatal en defensa del medio ambiente, sino que fuera más allá, fomentando el odio contra las universidades y la ciencia en general. El fin de muchas asociaciones cívicas y la cancelación de la financiación científica (que ha dejado a miles de estudiantes sin becas de investigación y a las universidades sin dinero para pagar los salarios del personal de limpieza o la calefacción en invierno) no fueron los únicos efectos secundarios de la política medioambiental brasileña. No sorprende que, en algunos países europeos donde muchos científicos brasileños se han autoexiliado, la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022 haya sido tan celebrada.

Consciente de que la mejor manera de obtener protagonismo internacional y recuperar la imagen de Brasil es a través de una política medioambiental conectada con el esfuerzo global

para preservar el medio ambiente, el presidente electo Lula eligió la COP 27 como escenario para su gran regreso.

Lula llegó a Sharm-el-Sheik, Egipto, sede de la reunión, junto con Marina Silva. El reencuentro de Marina y Lula tiene varios significados. El primero es político y está relacionado con la política interna brasileña. Marina Silva fue ministra de Medio Ambiente de 2003 a 2008, durante parte de los dos mandatos de Lula, cuando puso en marcha un programa de protección medioambiental que redujo la deforestación en un 67%. Dejó el gobierno por desacuerdos con otros ministros, que querían relajar las normas medioambientales.

Marina Silva, cuya trayectoria de vida puede equipararse a la de Lula, al salir de la extrema pobreza al liderazgo nacional, se había presentado como candidata a la presidencia en 2010 en una carrera contra Dilma Rousseff, elegida por Lula para sucederle. Marina sufrió fuertes ataques del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula durante la campaña y perdió las elecciones, lo que aumentó su resentimiento y su distancia con Lula. En 2016, ya en su segundo mandato, Dilma Rousseff sufrió un proceso de impeachment. El apoyo de Marina Silva al proceso fue muy criticado por la izquierda.

El nuevo acercamiento de Marina Silva a Lula se produjo recientemente, cuando varios dirigentes que se habían distanciado del PT optaron por integrar el frente amplio montado por Lula para derrotar a Bolsonaro, antiguos enemigos como dirigentes de partidos socialdemócratas y de izquierda decidieron apoyar a Lula ante el riesgo de un nuevo mandato de Bolsonaro. En la COP 27, Marina Silva, que se postula para ocupar de nuevo la cartera de Medio Ambiente, dijo que Lula ha cambiado y que en esta nueva gestión el compromiso medioambiental será mayor que en las anteriores, con el objetivo de la deforestación cero.

En enero de 2023, ya en representación del gobierno brasileño como Ministra del Medio Ambiente en la más reciente edición del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, Marina Silva llevó el mensaje de que "Brasil tiene compromisos ambiciosos en relación a ser un país que quiere ser económicamente próspero, socialmente justo, políticamente democrático, culturalmente diverso y ambientalmente sostenible".

Si el primer significado de la unión entre Lula y Marina era político, el segundo es un claro guiño diplomático. Al dar poder a Marina Silva, Lula quiere enviar un mensaje al mundo de compromiso con las cuestiones climáticas y medioambientales. En declaraciones a la prensa durante el acto, Lula confirmó este esfuerzo al afirmar: "Estoy aquí para decirles que Brasil ha vuelto al mundo. Brasil está saliendo del capullo al que ha estado sometido durante los últimos cuatro años. Brasil no nació para ser un país aislado".

Lula también pidió que Brasil sea sede de la próxima COP y defendió la creación de una estructura de gobernanza mundial para tratar el cambio climático. Según Lula, no habrá seguridad climática para el mundo sin una Amazonia protegida. También criticó el desmantelamiento en el área ambiental promovido por la gestión de Bolsonaro y prometió que el tema del clima ambiental tendrá el más alto perfil en la estructura de su gobierno.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que a Lula le espera una colosal tarea de reconstrucción ambiental en un ambiente político polarizado y conflictivo.

Tal vez este ejemplo lo ilustre mejor que todos: durante su gestión, Bolsonaro, de formación militar, combatió con empeño la transparencia de la información pública, no solo creando “sigilos” informativos de cien años sobre los actos de su gobierno, o presupuestos “secretos” para ser usados a discreción. La investigación científica y periodística, así como la gestión socio ambiental, sufrieron especialmente la censura informativa: riquísimas plataformas nacionales de *big data* sobre cambio climático en Brasil o sobre el estado de las unidades de conservación en las selvas, que estaban disponibles históricamente en las paginas web del Ministerio de Medio Ambiente, fueron eliminadas de un día para el otro, antes la mirada estupefacta de científicos, periodistas y de estudiantes.

En lugar de bajar los brazos, muchos volvieron directamente al terreno para ver lo que los órganos de control ambiental, las plataformas de datos del Ministerio de Medio Ambiente y los satélites de vigilancia del uso de la tierra apenas conseguían revelar. Dos de ellos, el ambientalista y defensor de los derechos indígenas Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips, murieron en el intento. Fueron asesinados a balazos por cazadores ilegales en su barco en el río Javari, en el oeste del Estado de Amazonas, una de las áreas mas remotas de esa región (The New York Times, 2022). Pereira quería continuar protegiendo la selva y a los indígenas que la habitan. Phillips quería mostrar cómo las comunidades indígenas intentaban defenderse de los cazadores y pescadores furtivos, que a menudo actúan con impunidad alentada por el actual gobierno. Bolsonaro se limitó a decir que las víctimas habían sido “imprudentes” y puso la culpa en ellas, al decir que Phillips no era “bien visto” en la región de Javari. Sus restos fueron encontrados semi-enterrados entre la penumbra húmeda de los árboles amazónicos. Mientras Brasil aún se recupera del shock de sus muertes, las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente continúan alertando, como durante los últimos cuatro años: “*La información que usted busca está siendo actualizada, vuelva ulteriormente*”. Muchos esperan poder volver a trabajar con libertad y sin temor a partir del 1 de enero de 2023.

Referencias

- 1 - El País Brasil. "La política medioambiental agudiza el choque ideológico en todo el mundo", por Olivier Stuenkel. 12 de julio de 2019
- 2 - BBC News Brasil. "¿Qué es el 'globalismo', término utilizado por el nuevo canciller de Brasil y por Trump?". 03 de febrero de 2019.
3. Fonseca, I. F. da, Lindoso, D. P., & Bursztyn, M. (Falta de) controle do desmatamento na Amazônia brasileira: do fortalecimento ao desmantelamento da autoridade governamental (1999-2020). *Sustainability in Debate*, 13(2), 12–31. <https://doi.org/10.18472/SustDeb.v13n2.2022.44532>, 2022.
- 4 - Rizzini Freitas, C. Abreu Carvalho, R.; Oviedo, A. La financiación de la gestión medioambiental en Brasil: una evaluación a partir del presupuesto público federal (2005-2022). Junio de 2022. <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/t3d00048.pdf>

5 - The New York Times. “Vivimos con estas amenazas”: los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira. Por Jack Nicas, el corresponsal de The New York Times en Brasil. 11 de julio de 2022.

<https://www.nytimes.com> › 2022/07/11 › espanol › dom-...